

www.elsoca.org www.facebook.com/elsoca.org www.twitter.com/elsocca

HONDURAS.- CORAJE POPULAR, VACILACIONES Y TRAICIONES: UNA OPORTUNIDAD PERDIDA EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE ELECTORAL



REBELIÓN EN IRÁN Y EL JUEGO DE LAS POTENCIAS

LA REVOLUCIÓN ALEMANA DE 1918 (I PARTE)

COSTA RICA.- EN PRÓXIMAS ELECCIONES: LLAMAMOS A LA ABSTENCIÓN ELECTORAL



GUATEMALA.- Nuevo pacto entre sectores de la burguesía en el Congreso



EL SALVADOR.- Así van las cosas en el MINED



LOS OBJETIVOS DE TRUMP AL FINALIZAR EL TPS PARA LOS TRABAJADORES CENTROAMERICANOS

En noviembre del 2017 la administración Trump dio a conocer sus intenciones en torno al programa conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS) para los trabajadores centroamericanos. El TPS protege a 60,000 trabajadores de Honduras y a 263,000 trabajadores de El Salvador.

Trump eliminó este beneficio para 2,500 trabajadores nicaragüenses migrantes a partir de enero del 2019, argumentando que ya no era necesario dado los niveles de seguridad imperantes en ese país. Lo mismo hizo con los trabajadores de Haití. A raíz de este anuncio, los trabajadores centroamericanos protegidos por el TPS están al borde de la deportación.

En enero del 2019, la administración volvió a la carga contra los trabajadores migrantes centroamericanos. Esta vez les tocó el turno a los trabajadores salvadoreños. Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dio a conocer una prórroga para los trabajadores de Honduras, un leve respiro hasta el 18 de julio del 2019, y una cancelación definitiva del programa TPS para los trabajadores salvadoreños. A partir de la fecha de cancelación del programa, la administración Trump otorga 18 meses como transición hacia una legalización de manera individual, o en su defecto la simple deportación.

Esta decisión de la administración Trump, así como la cancelación del programa DACA, que permitiría legalizar a quienes arribaron a Estados Unidos siendo menores de edad, forma parte de una ofensiva contra la clase trabajadora en Estados Unidos, específicamente contra un sector numeroso, pero en indefensión legal: los trabajadores migrantes centroamericanos. Los constantes ataques contra las minorías y contra los trabajadores mexicanos y centroamericanos persigue mantener la hegemonía o supremacía de los blancos de origen europeo, sobre el mosaico de nacionalidades que habitan en Estados Unidos.

Este racismo supremacista blanco pretende obtener dos objetivos centrales al mismo tiempo. En primer lugar, que la población de origen hispano, no se convierta en la principal minoría de Estados Unidos, superando a la minoría de origen africano. Esto tiene grandes repercusiones políticas: Trump quiere evitar que los hispanos se transformen en ciudadanos con plenos derechos políticos, lo que modificaría radicalmente el establishment norteamericano.

En segundo lugar, rebajar las condiciones de trabajo y de salario de los trabajadores migrantes que quedan todavía trabajando en ese país. De esta manera pretende devolver empleos a los trabajadores norteamericanos blancos (gabachos), los que por cierto constituyen un segmento del proletario norteamericano con escasa preparación académica o técnica. Este sector votó masivamente a favor de Trump.

Mientras Trump trata de arreglar algunas cosas en su casa, está quebrando el mobiliario en la casa de los presidentes centroamericanos. Tanto las economías de El Salvador, la más enferma de Centroamérica (tiene varios años que no crece mas allá del 2% anual), como la de Honduras, no tienen capacidad para absorber semejante cantidad de trabajadores.

Paralelamente, Trump esta deportado a todos los miembros de las pandillas centroamericanas que operan en Estados Unidos. El resultado será doblemente trágico, porque los deportados vienen graduados como especialistas del crimen organizado, y sus deportaciones masivas crean presión sobre los saturados aparatos de seguridad de los gobiernos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras).

Lo más trágico de esta situación es que los poderosos sindicatos de Estados Unidos se hacen de la vista gorda y hasta simpatizan con las políticas xenófobas de la administración Trump.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a los sindicatos de Estados Unidos (AFL-CIO y demás) a cerrar filas y a encabezar la defensa legal de los trabajadores centroamericanos que amenazan con ser deportados. Solo la movilización impedirá la cristalización de las políticas de Trump, que por cierto también fueron aplicadas por Obama, pero en una escala menor. Al mismo tiempo llamamos a los trabajadores de todos los países de Centroamérica a luchar unidos por la defensa del derecho de residir legalmente y trabajar en Estados Unidos.



ESCA No. 255
Segunda Quincena de Enero 2018

Impresión: 23 de Enero de 2018

DIRECTOR:
Victoriano Sánchez

CONSEJO EDITORIAL:
Armando Tezucún,
Germán Aquino,
Alberto Castro,
Melchor Benavente,
Eduardo Villalobos,
José Manuel Flores Arguijo (in Memorian).

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Ricardo Ruiz

AQUI NOS ENCONTRÁS
www.elsoca.org
facebook.com/elsoca.org
twitter.com/elsoca

Redacción:
elsoca@elsoca.org

Secretariado Ejecutivo:
psoca@elsoca.org

Secciones:
psoca_guatemala@elsoca.org
psoca_salvador@elsoca.org
psoca_honduras@elsoca.org
psoca_nicaragua@elsoca.org
psoca_costarica@elsoca.org

EL SOCIALISTA CENTROAMERICANO es una publicación del **PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOCA)**, fundado y reconstituido el día 4 de Abril del año 2009.

Se publica en dos formatos: una versión digital que se actualiza diariamente **(www.elsoca.org)** y otra versión impresa que se publica quincenalmente.



ASÍ VAN LAS COSAS EN EL MINED.

Por: Alberto Castro.

El 2018 inició en el MINED con dos movilizaciones distintas: una es la de la lucha unificada de algunos sindicatos que constituyen la unidad del gremio por mejoras salariales y defensas laborales y la otra es la del proselitismo electoral de las estructuras burocráticas sindicales ligadas al FMLN, que se apoyan principalmente en ANDES 21 de Junio. Con el apoyo de ATRAMEC, SEDESA, SIANDES, SIMEDUCO y Bases Magisteriales convocaron el 15 de enero a todo el magisterio en la Plaza de Banderas de CIFCO para protestar por las anomalías en plazas otorgadas a docentes y funcionarios y por el incumplimiento de la nivelación salarial aún pendiente, pero esto fue repelido por el Gobierno del FMLN de la manera más sucia posible; coaccionándoles por medio de ANDES 21 de Junio que envió a docentes interinos a cerrar calles aledañas a la protesta, neutralizándoles la acción, esta última ha convocado a un evento político electoral para el 25 de enero en CIFCO, evidentemente hay dos tipos de movilizaciones distintas una que representa a los trabajadores de Educación y otro que obedece a algo ajeno pero que tiene fuerte presencia, como lo es la agitación electoral del FMLN.



Del acuerdo a la falsedad

Antes del cierre del 2017 la lucha sindical propicio que las autoridades de Educación atendieran las demandas, por lo que en aquel momento fueron establecidas dos mesas: una técnica y otra política, la técnica conformada por administradores del MINED (finanzas, presupuestos y desarrollo humano), con los secretarios generales de todos los sindicatos, y la mesa política la integrada por los representantes de CAPRES, el Ministro de Educación, Carlos Canjura, finanzas del Ministerio y los representantes sindicales.

De estas mesas no se ha producido ningún acuerdo, lo cual muestra que en realidad su creación fue una táctica dilatoria de las autoridades, y esto se observa a partir de que el presupuesto para el MINED de este año no refleja la nivelación salarial. La protesta del 15 fue a consecuencia de esta falta de cumplimiento del ministro a los acuerdos. El presidente Sánchez Cerén, que en la gestión anterior fue ministro de Educación e hizo promesas de mejoras salariales, ha anunciado que está dispuesto a dialogar con los sindicalistas, pero sin puntualizar la atención a las demandas de los trabajadores. En su lugar alienta a que la lucha se centre contra el Ministerio de Hacienda y diputados de la derecha de la Asamblea Legislativa, para que faciliten un refuerzo presupuestario y sea posible la revisión salarial. Se entiende la pretensión del Gobierno: en plena coyuntura electoral necesita redimirse con quienes han sido afectados con su gestión; los empleados públicos, esencialmente de Educación, y evitar una lucha prolongada que le ocasionaría reveses electorales, por lo que la movilización les haría servirse de la necesidad de los trabajadores docentes y administrativos presentándose como redentor.

Nivelación salarial para una educación de calidad

Si bien esto se externa como una lucha gremial y asilada, en realidad debe ser acompañada por los padres de familia de los alumnos de la educación básica, por lo que el pliego de demandas debe ser más amplio, y ser el preámbulo de una lucha por una mejora en la Educación, que beneficie tanto a los trabajadores administrativos como a los usuarios de la educación pública: los niños, niñas y adolescentes del país. El Salvador es uno de los países que menos inversión tiene en Educación, ya que dedica solo el 4% del PIB, cuando debería ser mucho más, de manera que puedan resolverse las carencias educativas.

El MINED en los últimos años ha ido sufriendo recortes presupuestarios. Los maestros y trabajadores administrativos deben consensuar acciones, en coordinación con padres de familia y alumnos, explicándoles en asambleas informativas las razones de la lucha, para que los cierres de escuelas e institutos tenga su apoyo y no sea presentado por el GOES como una falacia en contra de los alumnos. A corto plazo se tiene que atender la revisión salarial, pero a largo plazo se debe procurar que el MINED reciba el 9% del PIB con el que se asegure la reparación de la escuelas e institutos, mobiliario y tecnología necesaria, todo en supervisión de los trabajadores, esto junto a la ampliación de los programas sociales que actualmente se tiene en Educación.

CORAJE POPULAR, VACILACIONES Y TRAICIONES: UNA OPORTUNIDAD PERDIDA EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE ELECTORAL

Una vez más el pueblo de Honduras, ha sido engañado y traicionado por sus dirigentes tradicionales, a pesar de la heroica lucha en las calles y barricadas, en las que hubo decenas de muertos y centenares de luchadores capturados, verdaderos presos políticos. La lucha contra el fraude electoral tuvo su auge en la semi insurrección de finales de noviembre e inicios de diciembre del 2017, un estancamiento a finales de ese mismo año, para entrar en pleno declive a inicios del 2018.

Pero la culpa de este desastre no recae en las masas, que siempre han luchado, sino en la conducción de Salvador Nasralla y Mel Zelaya, así como en el conjunto de la cúpula del partido Libertad y Refundación (LIBRE) y de la Alianza de Oposición contra la dictadura.

Los giros oportunistas y la traición de Nasralla

En las pasadas elecciones nos negamos a llamar a votar por Nasralla, porque la trayectoria política de éste nos indicaba que, a pesar de su popularidad y su discurso radical, en determinado momento terminaría traicionando la decisiva lucha contra el continuismo y la reelección de Juan Orlando Hernández (JOH).

A pesar de nuestra advertencia, la mayoría del pueblo confió en Nasralla y le dio su voto, metiendo en aprietos el proyecto reeleccionista de JOH, pero al final Nasralla despreció ese respaldo popular.

El primer giro oportunista se produjo cuando Nasralla, por presiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), firmó un acuerdo de tres puntos, el pasado 29 de noviembre del 2017, llamando a "esperar en calma y en paz el escrutinio de la elección del pasado 26 de noviembre", alimentando la confianza en los resultados electorales, cuando era más que evidente que la maquinaria del Partido Nacional estaba trabajando a toda marcha, borrando datos de los servidores del Tribunal Supremo Electoral (TSE), creando nuevas actas, escaneando firmas de fiscales de los partidos, en fin, montando un sofisticado fraude electoral. Nasralla primero había llamado a la protesta nacional para defender su victoria electoral, pero inmediatamente después estaba firmando el acuerdo con la OEA para luego negar su firma.



Incluso, en momentos cruciales, Nasralla desapareció de la escena política, creando todo tipo de rumores sobre su separación de la Alianza que encabezaba Mel Zelaya y el partido LIBRE. Nasralla viajó a Estados Unidos a negociar con el departamento de Estado de los Estados Unidos el reconocimiento de su victoria electoral. Para presionar al imperialismo, la Alianza de Oposición contra la Dictadura organizó una marcha frente a la embajada norteamericana en Tegucigalpa, en donde Nasralla informó a sus seguidores los frutos amargos de sus negociaciones en Washington: "Hemos tenido un viaje con reuniones y he estado en conversaciones con la Organización de Estados Americanos, (OEA), y con la Unión Europea, porque la decisión de quién es el presidente de la república todavía no está tomada (…) la opinión emitida por el Tribunal Supremo Electoral, (TSE), es solamente una opinión porque ese proceso está viciado y lo comprueba la Organización de Estados Americanos. Ya ganamos, pero estos ladrones quieren que se lo demostremos otra vez (…) Seguiremos protestando para que se me nombre presidente o se repitan las elecciones (….) Estados Unidos no puede mandarnos a la señora Fulton a imponer un fraude porque no lo aceptamos (…) La OEA comprobó que el proceso electoral está viciado (El Heraldo 21/12/2017)

El discurso de Nasralla mostraba las inconsistencias de su estrategia política: por un lado, ejercía presión con el movimiento de masas en las calles, pero, por el otro, mantenía confianza ciega en que la decisión del imperialismo norteamericano le favorecería. Y como reaseguro, por si acaso, al final de su



discurso criticó a un funcionario de menor jerarquía, como era la señora Fulton, quien ya había reconocido a JOH como el triunfador.

Nasralla le dio el tiro de gracia a la lucha de masas contra el fraude electoral, que todavía se batía en las calles contra las fuerzas represivas del Estado, cuando, después que el gobierno de Estados Unidos oficializó el reconocimiento de la supuesta victoria electoral de JOH, declaró en una conferencia de prensa lo siguiente: "(…) Al no ser miembro de un partido, porque participé en la Alianza como candidato independiente, en el momento que Estados Unidos, que es quien decide las cosas en Centroamérica, le da el apoyo a Juan Orlando Hernández, prácticamente está decidiendo el futuro de la Alianza que fue formada con fines electorales. Ahora, nuestra lucha a favor del pueblo hondureño contra la dictadura continúa, lo que pasa es que las instancias de impugnación o de nulidad que nosotros hemos presentado, ya pasó lo mismo en el año 2013. Es el mismo tribunal electoral que me robó medio millón de votos el que va a decidir si da lugar o no a la nulidad, y después de esa instancia sigue la Corte Suprema de Justicia (…) a lo más que podemos aspirar es convocar al Consejo Permanente de la OEA para aplicar la Carta Democrática, ese proceso continúa. Cuando yo hablo que me estoy retirando, si esta causa ya está perdida, local e internacionalmente, yo ya no tengo nada que hacer en política, pero el 80% del pueblo que está a mi favor va a continuar la lucha. Yo apoyo esa lucha (…)". (desgrabación en France24)

Las declaraciones de Nasralla varían dependiendo del medio de comunicación. Ante El Heraldo, dijo "He concluido mi etapa como candidato de la oposición. Llegó el momento de luchar como una fuerza nacional que incluya a la gente buena de las fuerzas armadas, a los empresarios honestos, a los jóvenes, a los honestos, a los gremios, a todas las personas que luchan porque en Honduras exista Estado de Derecho para restituir la democracia" (El Heraldo, 23/12/2017)



La noticia del retiro de Nasralla, creó un fuerte roce con Mel Zelaya, quien se encontraba al frente de LIBRE, un partido presionado por el movimiento de masas que quería continuar la lucha contra la reelección de JOH.

Estos giros oportunistas de Nasralla se produjeron durante el mes de diciembre del 2017, y contribuyeron enormemente a la desmovilización.

Se perdió una gran coyuntura favorable

La política es el arte de aprovechar las coyunturas favorables, pero el oportunismo y las estrategias y tácticas erróneas de Nasralla y de Mel Zelaya, dejaron pasar la coyuntura en que el gobierno de JOH se encontraba debilitado por la enorme rebelión popular en su contra, la sublevación de una parte de los mandos policiales, y un entorno internacional favorable a la lucha contra el fraude electoral, al grado que hasta la propia OEA, ese ministerio de colonias del imperialismo norteamericano, se pronunció por la realización de nuevas elecciones.

Tanto Salvador Nasralla como Mel Zelaya son políticos burgueses, que pelean contra las otras fracciones de la burguesía, por el control y administración del Estado, que es la fuente del enriquecimiento y de los privilegios personales y de grupo. Aunque el partido LIBRE tiene una base social popular y de clase media, la conducción de esta agrupación es netamente burguesa, por su programa político y por sus actuaciones. Nasralla y Mel Zelaya nunca tuvieron como objetivo central el derrocamiento de JOH por la vía revolucionaria, y la de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sino la de convencer al imperialismo norteamericano que ellos habían ganado las elecciones y que garantizarían la aplicación de los mismos planes de modernización del Estado que estaba aplicando JOH. Y para convencer a los indecisos, promovieron inicialmente las protestas populares, pero cuando estas se transformaron en una semi insurrección popular, echaron marcha para atrás, llamando a la calma y a las protestas pacíficas, desmontando la enorme rebelión popular, pero amenazando con reanudarla mas adelante.

Con esa manipulación del descontento popular, lo que hicieron fue mojar la pólvora, y dejar que JOH recuperara la iniciativa política.

El Partido Nacional se garantizó la mayoría de diputados y alcaldes

Mientras Nasralla y Mel Zelaya se concentraban en pelear la presidencia de la república, es decir, el poder ejecutivo que nombra a ministros y altos funcionarios y maneja el presupuesto nacional, el Partido Nacional se garantizó 61 diputados, mientras LIBRE obtenía apenas 30 diputados y el Partido Liberal bajaba hasta 26 diputados, garantizándose de esta manera el control del PN en la directiva del futuro Congreso Nacional.

De igual manera, a nivel de alcaldes el Partido Nacional ganó 173 alcaldías, el Partido Liberal gano 89 alcaldías, mientras que el partido LIBRE, soporte de la Alianza de Oposición contra la dictadura, ganó apenas 31 alcaldías. ¿El fraude electoral fue solo a nivel presidencial? ¿No hubo fraude en las elecciones a diputados y alcaldes?

La situación adversa ha sido aprovechada por JOH para continuar avanzando. El día 21 de Enero, la aplanadora del Partido Nacional, con los votos de los partidos minoritarios colaboracionistas (APH, DC, PAC y UD), escogieron a la Junta Directiva Provisional

del Congreso Nacional, garantizando con ello la hegemonía del Partido Nacional en la elección de la Junta Directiva, avanzando en el control del poder legislativo.

La nueva trampa: el Diálogo Nacional

Una vez que JOH fue ungido por el gobierno de Estados Unidos como el nuevo presidente de Honduras, éste dejó de estar a la defensiva, y siguiendo el guión asignado llamó a un Diálogo Nacional con la oposición. Todas las Iglesias protestantes, incluida la Iglesia Católica, el mismísimo Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y una infinidad de organismos de la llamada sociedad civil, burócratas sindicales y dirigentes populares, apoyaron la propuesta de JOH. Necesitaba ganar tiempo hasta colocarse nuevamente la banda presidencial. Para garantizarse mayoría dentro del futuro Diálogo Nacional "incluyente", JOH resucitó a los mismos organismos de la sociedad civil que Micheletti usó en su momento en la lucha contra el golpe de Estado del 2009.



Pero la traición más grande se produjo cuando Nasralla aceptó el llamado al Diálogo Nacional hecho por JOH. Utilizando el mismo lenguaje contradictorio de siempre, no pero si, si pero no. Nasralla declaró a su regreso de Estados Unidos, en respuesta al llamamiento de Diálogo de JOH: "Que bueno que está llamando a un diálogo, por supuesto que acepto. Todo lo que sea diálogo es bienvenido, con todo gusto. Llego mañana y podemos empezar el diálogo mañana mismo en la tarde" (Once noticias, 20/12/2017). No obstante, ese mismo ajustó un poco el sentido de sus declaraciones, al afirmar que "El diálogo al que yo aludo en mi comunicación, es a un diálogo basado que gané yo, me reuniré con él solo si acepta que perdió en el conteo, que yo gané y que tenemos que ir a unas nuevas elecciones, de lo contrario no hay diálogo". (La Tribuna, 20/12/2017)

A partir de esta aceptación contradictoria, toda la agenda política en Honduras comenzó a girar en torno al Diálogo, en detrimento de la lucha popular que se resiste a morir. Por su parte, Mel Zelaya, un viejo zorro de la política, fue más cuidadoso y declaró que "si el candidato electo (Salvador Nasralla) quiere dialogar con él, yo no tengo ningún problema con eso, yo respeto la decisión del candidato, pero antes de ir a ese diálogo nosotros pondríamos condiciones" (Once noticias, 20/12/2017).

El problema es que Zelaya tiene pequeñas diferencias tácticas con Nasralla, sobre cómo participar en el Diálogo, pero no se opone tajantemente a la maniobra política que pretende darle legitimidad democrática a la nueva presidencia de JOH.

Por otro lado, el Partido Liberal apoyó desde el inicio la propuesta de Diálogo Nacional. Yuri Sabas, jefe de bancada del Partido Liberal se manifestó a favor del Diálogo Nacional: "Somos un partido de diálogo, pero queremos que sea un diálogo, no un monólogo. Por lo general cuando invitan a un diálogo ya están todos los temas y solo quieren que sirvan en una pieza de ajedrez, quiero que escuchen a la gente que anda en la calle, necesitamos buscar la paz y el orden". (Proceso, 19/12/2017)

Inicialmente, Luis Zelaya, ex candidato presidencial del Partido Liberal, se opuso a la propuesta de Diálogo, pero posteriormente en un comunicado oficial, se ratificó la posición de participar en el Diálogo Nacional: "Por eso el Partido Liberal está dispuesto a sentarse a la mesa para dialogar, pero con la condición de que sea con todos los sectores y previo a ello que renuncien los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que por su accionar son los principales responsables de esta convulsa situación. Por ello pido incluir en el diálogo a todos los partidos políticos, obreros, iglesias, es decir, a toda Honduras, pero quiero aclarar que no atenderé el llamado que ha hecho el presidente Hernández. Sin embargo, estoy dispuesto a un diálogo siempre y cuando haya condiciones igualitarias". (El país, 20/12/2017). Si pero no, no pero si.

El ambiente de las fiestas navideñas y de fin de año, bajaron los niveles de lucha popular, pero ya en enero del 2018 existe una coyuntura totalmente distinta, desfavorable a la lucha popular, en la medida que todas las fuerzas políticas, incluido el partido LIBRE, comenzaron a definir políticas en torno al Diálogo Nacional.

A mediados de enero, las diferencias tácticas entre Nasralla y Mel Zelaya habían desaparecido. La Alianza apareció nuevamente unida en torno a que se podía participar en el Diálogo Nacional, siempre y cuando existiera un garante internacional. Al parecer Mel Zelaya ha olvidado la amarga experiencia del Diálogo de Cartagena de Indias, que condujo a la firma de los Acuerdos de Cartagena, que tuvo como garantes al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y al entonces canciller venezolano, Nicolás Maduro. Al final de cuentas, ¡los garantes internacionales no garantizaron nada!

El Partido Socialista Centroamericano



(PSOCA) rechaza absolutamente el Dialogo Nacional con el gobierno de JOH, porque se trata de una maniobra distractora para calmar el descontento popular, crear un listado de promesas sobre posibles reformas o cambios democráticos, que el nuevo gobierno de JOH se comprometerá a implementar, pero que no hará o lo hará a medias, ya que el objetivo central del nuevo gobierno es una continuidad del anterior: Modernizar el aparato represivo del Estado, restablecer el orden y la estabilidad económica, a costa de los derechos democráticos y de las pocas conquistas económicas que aún tienen las masas populares.

¿Por qué fracasó el paro nacional del 20 al 27 de enero?

Para ocultar la cadena de errores políticos, la conducción de Nasralla y Mel Zelaya convocaron a un paro nacional de 7 días, que iniciaría el día 20 de enero y terminaría el día 27 de ese mes, con el objetivo de evitar que JOH tomara posesión del cargo de presidente de Honduras.



Debido a que se desaprovechó la coyuntura favorable de la semi insurrección de finales de noviembre y comienzos de diciembre del 2017, y que la dirección de Nasralla y Mel Zelaya, con giros y contra giros, han contribuido a la desmovilización, los resultados del paro nacional programado para el 20-27 de enero han resultado en un verdadero fracaso.

Lo primero que debemos señalar es que este paro fue convocado por las conducciones políticas de Nasralla y Mel Zelaya, pero sin tomar en cuenta a las organizaciones de trabajadores, ni a las organizaciones sociales y populares, ni a los luchadores que han estado firmes en las barricadas. Las declaraciones de Nasralla, sobre su retiro de la actividad política y la aceptación del Dialogo nacional con el gobierno de JOH, con las mil y una condiciones que ha puesto, han desmoralizado al movimiento de masas. La pólvora ha sido mojada tantas veces, que ya no puede encender, al menos por el momento.

Todavía se mantienen en pie de lucha pequeños grupos de luchadores, una vanguardia combativa que se resiste a abandonar la lucha contra el fraude electoral. Hacia ellos nuestro respeto y admiración. Son el ejemplo a seguir. Pero debemos evaluar correctamente la situación, para evitar que el heroísmo y sacrificio de la lucha popular no sea utilizada como mecanismo de presión de Nasralla y Mel Zelaya en la mesa de negociaciones con el gobierno de JOH. Estos grupos son quienes soportan la brutal represión del Ejercito y de la Policía. La represión ha sido tan intensa, que varios organismos internacionales han sonado las alarmas por las constantes violaciones a los derechos humanos en Honduras.

¡A organizar la resistencia!

A como está la correlación de fuerzas, todo indica que la toma de posesión de JOH como nuevo presidente de Honduras es un hecho casi consumado. Pero la lucha contra el continuismo debe continuar. El régimen político en Honduras ha sufrido una peligrosa metamorfosis. El bipartidismo en crisis ha dado lugar a la hegemonía del Partido Nacional, a un bonapartismo que tiende a convertirse rápidamente en un régimen dictatorial, que no respeta la voluntad popular.

De la misma manera que lo hicimos en la lucha contra el golpe de Estado del año 2009, y bajo el espurio gobierno de Roberto Micheletti, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a los sindicatos, centrales obreras y campesinas, así como a los jóvenes luchadores populares, a organizar la resistencia contra el gobierno ilegitimo de JOH. Esta resistencia pasa por organizar comités, de todos aquellos que se opusieron al fraude electoral, para continuar la lucha casa por casa, calle por calle, organizado primero pequeñas acciones (luchas salariales, por mejoras en los barrios, en los colegios y universidades, mítines y jornadas de protesta, etc) hasta concluir en un movimiento nacional de masas que permita crear las condiciones para organizar una huelga general que permita el derrocamiento del gobierno fraudulento e ilegitimo.

Es necesario construir una nueva dirección revolucionaria

Los acontecimientos relacionados con la lucha contra el fraude electoral confirman, una vez más, que es necesario construir una nueva dirección revolucionaria, en un proceso de unidad de acción con aquellos sectores que estuvimos luchando contra la reelección presidencial. Para poder aplastar a la dictadura que se está gestando en Honduras, necesitamos sacar las lecciones de estas jornadas de lucha, y con la discusión fraternal, superar errores, corregir defectos, desarrollar los aspectos positivos, y fomentar la unidad entre los revolucionarios, para librar la batalla política contra las direcciones burguesas que, como Nasralla y Mel Zelaya, engañan y confunden de manera permanente a los trabajadores y al pueblo

Centroamérica, 22 de enero del 2017

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

LA ELECCIÓN DE NUEVA DIRECCIÓN DEL CONGRESO: ¿UN NUEVO PACTO ENTRE BURGUESÍAS?

Por Armando Tezucún

La elección de la nueva Junta Directiva del Congreso de la República representa el afianzamiento del control del Poder Legislativo por parte de los grupos de la burguesía emergente que han lucrado históricamente con la corrupción en las instancias del Estado; estos grupos han sido objeto de persecución penal desde 2015, acciones encabezadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), instituciones a las que se unió la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y que fueron apoyadas hasta el último momento de su gestión por el ahora exembajador de Estados Unidos, Todd Robinson. La nueva Junta Directiva hará su parte en el plano legislativo dentro el plan de esta burguesía corrupta por frenar la labor del MP y la Cicig, bloqueando las reformas significativas al sistema judicial y político, y dando curso a los proyectos de ley represivos presentados por diputados afines, y que están en discusión en las comisiones legislativas.

Una elección complicada en el Congreso

El 14 de enero rindió su informe del segundo año de gobierno el presidente Jimmy Morales. Ese día debía asumir la nueva Junta Directiva del Congreso, cuyo presidente debía presidir la sesión en la que el mandatario presentaría su informe. Sin embargo, los diputados se pusieron de acuerdo en la elección hasta el sábado 13; esto se debió al resquebrajamiento de la alianza que se formó en 2016 para elegir la nueva dirección del Congreso para 2017, y al fraccionamiento interno de las distintas bancadas, incluyendo a la del oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). Al margen de que todas esas bancadas aliadas respaldan una agenda que enfrenta al MP, la Cicig y se oponen a los cambios en el sistema político y judicial, los intereses y ambiciones particulares afloraron ante el proceso de elección de la nueva dirigencia del legislativo.



El primer intento de elegir la Junta Directiva se dio el 5 de diciembre del año pasado, cuando el FCN y sus aliados presentaron en sesión plenaria la única planilla propuesta, con el diputado Francisco Tambriz, de Alianza Ciudadana, como presidente. Esta planilla no logró el mínimo de 80 votos requeridos, y la elección fue pospuesta para enero de 2018.

Desde inicios del mes empezaron a ser mencionados nombres de candidatos a presidir la Junta Directiva que ya lo habían intentado en diciembre. En especial se mencionó a Manuel Conde Orellana, Óscar Chichilla (presidente en 2017), Boris España, Carlos Fión, Julio Ixcamey, pero ninguno logró reunir los votos suficientes para consolidar sus candidaturas.

Álvaro Arzú Escobar logra el aval del presidente Morales y el FCN

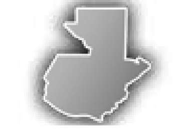
Luego de que la dirección del legislativo convocara para el sábado 13 a un último intento de elegir Junta Directiva, sorpresivamente se dio a conocer que el hijo del alcalde capitalino Álvaro Arzú Irigoyen, Álvaro Arzú Escobar, sería el candidato ungido por el presidente Morales, el FCN y los partidos cercanos que finalmente lograron un acuerdo. Arzú, único diputado del Partido Unionista, representa la alianza entre el alcalde metropolitano y el presidente Morales, surgida durante la crisis de agosto-septiembre, cuando este último declaró non grato al jefe de la Cicig Iván Velásquez, y trató de expulsarlo del país; ambos tienen en común el ser objeto de acusaciones por corrupción de parte del MP y la Cicig, y de habérseles solicitado el levantamiento de la inmunidad.

El anuncio de la candidatura de Arzú se dio casi al mismo tiempo que el embajador gringo Arreaga declarara que si el Congreso no elige una Junta Directiva que fomente la transparencia, será difícil que Estados Unidos continúe los programas de apoyo al país. "…si nosotros no tenemos una Junta Directiva confiable desde el punto de vista de su compromiso de la lucha contra la corrupción e impunidad, esto podría afectar programas, es difícil predecir cuales son los programas que afectaría y cómo… una Junta Directiva que no demuestre con hechos, porque no solamente de hablarlo, que no lo demuestre con hechos va hacer muy difícil para nosotros seguir adelante con algunos programas" (La Hora 09/01/18).

Arzú electo presidente del Congreso

El sábado 13 Arzú Escobar fue electo con 92 votos a favor, y el apoyo de las bancadas del FCN-Nación, Todos, Bloque Reformador, Alianza Ciudadana y Unión del Cambio Nacional; su planilla estuvo formada por miembros de esos partidos.

Desde las primeras declaraciones



de Arzú Escobar se hizo claro que éste representa los intereses de nuevos acuerdos entre las burguesías emergentes corruptas afectadas por la persecución del MP, la Cigig y la Sat, y un sector mayoritario del empresariado oligárquico que prefiere la estabilidad política para enderezar el rumbo de la economía y los negocios. El nuevo presidente del legislativo aseguró que su agenda incluirá leyes que fomenten el desarrollo y crecimiento económico y la generación de empleo; sostuvo que no conviene entrar a conocer las reformas constitucionales por cuestión de tiempo y por el desembolso que significa la consulta popular para aprobarlas, en vista de que este año habrá una consulta sobre el diferendo territorial con Belice. La embajada de Estados Unidos emitió un comunicado diciendo que "Las acciones del Congreso, y no sus palabras, demostrarán el compromiso de aprobar leyes que beneficien al pueblo de Guatemala, tanto como su compromiso de luchar contra la corrupción y la impunidad" (Prensa Libre 14/01/18).



El segundo informe de gobierno de Jimmy Morales

El domingo 14 el presidente Morales presentó ante el Congreso el informe de su segundo año de gobierno. El informe de Morales está lleno de falsedades, verdades a medias y omisiones; en ningún lado habló de la muerte de 42 jovencitas en el incendio de un hogar estatal, por culpa de sus funcionarios y por decisiones que él mismo tomó; no hizo mención de las acusaciones en su contra por delitos electorales y por corrupción, al haber aceptado de forma ilícita cheques a su nombre de parte del Ministerio de Defensa; y presentó como logros cosas que son obligación del Estado, como la entrega del presupuesto correspondiente a los organismos de justicia, incluido el MP.

Ante el anuncio de manifestaciones de parte del Comité de Desarrollo Campesino y otras organizaciones civiles, el presidente ordenó acordonar el edificio del Congreso de la República dos cuadras a la redonda, por cerca de 300 miembros de la Policía Nacional Civil, la Guardia Presidencial, la Policía Militar, las Fuerzas Especiales Policiales de la PNC y la SAAS, todos bien armados. La convocatoria a manifestar no tuvo el efecto esperado, pues a lo sumo un centenar de personas se hizo presente; a pesar de que en horas de la tarde un grupo decidido forcejeó con los policías para abrirse paso hacia el Congreso, las protestas no tuvieron trascendencia.

Tanto Arzú como el presidente Morales hicieron ver en sus discursos que no se dejarán presionar al momento de tomar decisiones, augurando actitudes autoritarias. Arzú dijo: "las obligaciones son de orden moral, y por eso son más importantes que los derechos… Vamos a escuchar a la ciudadanía, a la comunidad internacional y a los grupos organizados, pero no vamos a permitir que intenten decidir por nosotros, que traten de dictarnos qué debemos hacer, bajo medidas de hecho o de presión, vamos a exigir respeto al trabajo del Poder Legislativo" (El Periódico 15/01/18); y Morales expuso: "el poder debe ser ejercido por quienes fueron electos, no por presiones mediáticas o fácticas" (Idem).

La nueva agenda del legislativo

Desde la primera sesión plenaria, la nueva dirección del Congreso empezó a aprobar las leyes en materia económica que demanda la burguesía. La primera fue la Ley de Factoraje, que regula la negociación de documentos de crédito entre empresas, para permitir a los negocios que otorgan créditos a sus clientes, capitalizarse en poco tiempo. También se aprobó en primera lectura las nuevas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que sin embargo no toma en cuenta las reformas sugeridas por el Tribunal Supremo Electoral. Quedaron en agenda pendientes las reformas a la Ley de Zonas Francas y la Ley de Regulación de Apuestas, Casinos, Videoloterías, Bingos y Juegos de Azar.

El nuevo pacto entre las burguesías emergentes y sectores de la oligarquía ya tuvo su primera víctima, el ahora exintendente de la SAT Juan Francisco Solórzano Foppa. El directorio de la SAT, presidido por el ministro de finanzas Julio Héctor Estrada, destituyó a Solórzano Foppa por no haber llegado a la meta de recaudación fiscal 2017, a pesar de que alcanzó el 99.7% de la misma. La medida a todas luces fue una venganza por la persecución que hizo el ex superintendente contra los evasores y mafias defraudadoras del fisco. Solórzano Foppa atacó a grandes empresas como Aceros de Guatemala, a cafetaleros, ganaderos, y muchos empresarios, ganándose la animadversión de grandes sectores de la burguesía.

Unidad de acción de la izquierda y los movimientos populares

El nuevo pacto de las burguesías implica no solamente que los corruptos recuperen el terreno perdido, sino una ofensiva contra las organizaciones y luchas populares. Ya hemos planteado el peligro de las reformas a la Ley Contra el Terrorismo y la Ley de Ongs. Estamos también ante el recrudecimiento de los encarcelamientos y asesinatos contra líderes y lideresas populares. El momento demanda que se hagan acercamientos entre los grupos de izquierda y las organizaciones populares para diseñar una estrategia para enfrentar el avance de la represión. Consideramos que esta es una terea prioritaria en el momento actual.

REBELIÓN EN IRÁN Y EL JUEGO DE LAS POTENCIAS

Por Leonardo Ixim

Las revueltas obreras contra la teocracia chiíta en Irán y una serie de rebeliones en varios países del área, además del movimiento de piezas entre las potencias en la empantanada guerra civil siria, la guerra en Yemen, las elecciones en Egipto, pais clave en la región controlado por un gobierno autocrático, la rebelión en Túnez, Marruecos y Sudán, el espaldarazo del gobierno de Trump al Estado fascista Israelí para posicionarse sobre Jerusalén y el derecho a la autodeterminación de palestinos y kurdos. Todos estos acontecimientos pintan un escenario donde los intereses de las potencias imperialistas intervienen en los distintos conflictos de la región

Una teocracia producto de la revolución

Se acaba de iniciar el año con la noticia de las movilizaciones que obreros, estudiantes, mujeres y desempleados han protagonizado en el país persa. Estas son las movilizaciones más grandes después del denominado movimiento verde en 2009. Lo que motiva es la situación socioeconómica de las masas iraníes, a diferencia del movimiento verde que se caracterizó por denunciar el supuesto fraude electoral del presidente Ahmadinejad y las exigencias de derechos democráticos.

Hasan Ruhani, un reformista, fue re-electo en mayo de 2017, con el 57.13 por ciento en una participación masiva del 73 % de los empadronados, por el Partido Moderación y Desarrollo, imponiéndose sobre una serie de candidatos apoyados por los sectores conservadores de la clase dominante. Ruhani prometió que la negociación con las potencias nucleares el Grupo 5 más 1de levantar las sanciones que el imperialismo impuso a Irán a cambio de que Naciones Unidas inspeccionen el programa nuclear iraní, del que en todo momento Teherán siempre adujo que es para fines pacíficos, se traduciría en la lluvia de inversiones en sectores estratégicos claves como petróleo, la industria automotriz, petroquímica, etc., que serían de beneficio a la población.



Rohani asumió en 2013 sobre el candidato del ex presidente Ahmadinejad y los conservadores, prometiendo abrir a Irán al comercio mundial. El segundo asumió en 2006 bajo un programa de carácter populista que se caracterizó por impulsar programas sociales asistenciales respaldándose en la clase trabajadora. Ahmadinejad se reeligió en 2009 en elecciones que los reformistas calificaron de fraudulentas y promoviendo el movimiento verde protagonizado por sectores de capas medias; estos verían coronar su éxito con la llegada del actual presidente; además de que la alianza entre los populistas y conservadores se rompería y la candidatura de Ahmadinejad fuera prohibida para las elecciones de 2017, por el Consejo de Guardianes.

El régimen político en Irán

El régimen político iraní se caracteriza por elecciones periódicas cada cuatro años, pero previa aceptación de Consejo Guardianes, conformado por clérigos chitas dirigidos por el Ayatollah Ali Khameni, quienes aplican severamente la ley islámica y su interpretación chiíta en todos los órdenes de la vida social y política. Este sistema es producto de la contra-revolución que se impuso tras la revolución y el derrocamiento del Sha Reza Pahlevi en 1979, una monarquía odiada por la población sostenida por Estados Unidos donde este país era pieza clave de los intereses gringos.

El quiebre político se caracterizó por la insurrección de las masas y la creación de consejos obreros en fábricas los Shoras, la influencia del Partido de Masas (Comunista) de Irán -Tudeh por su nombre en persa- que bajo su orientación estalinista y las directrices de Moscú, le apostó a la dirección de un sector de la burguesía que rompió con el Sha y las potencias imperialistas. Este rompimiento fue del denominado bazar, o el sector burgués preocupado por el mercado interno y la dominación regional, representándose en los mullah o clérigos chitas. La contrarrevolución se impone a partir de la guerra que la dictadura iraquí de Saddam Hussein, apoyado por las reaccionarias monarquías del golfo Pérsico, apertrechado por los gringos y con el visto bueno de la URSS, lanza contra Irán. A lo interno el Ayatollah Jomeni y los clérigos afianzan su poder



sobre los Shoras, el movimiento kurdo Rahjilat que participó en la revolución y donde la izquierda tuvo su mayor apoyo y al mismo partido comunista, así como el Socialista Internacionalista de orientación trotskista, que fueron perseguidos.

Irán, actor clave regional

A posteriori dentro del bloque dominante se imprimió dos líneas, los reformistas que le apostaban a mayor dosis de libertades y a vincularse en el mercado mundial y los conservadores, cercanos a la teocracia y al mercado nacional y regional y una tercera, la populista. Estas líneas compiten por el control geopolítico contra Arabia Saudita apoyada por Estados Unidos e Israel, en una virtual guerra fría contra esta monarquía absoluta en guerras en Yemen, invadido por Arabia Saudita para detener un movimiento chiíta y Siria; además de disputarse la dirección de las dos corrientes del Islam, la chií y la suní. En la actualidad Irán tiene el respaldo o por lo menos la neutralidad de Turquía y Qatar, distanciados de Riyadh.

Regresando a las causas de la rebelión, la crisis de los precios del petróleo, el embargo que aun persiste y que Trump promete mantener si no se desmantela el programa nuclear iraní y la capacidad bélica convencional, la política de privatizaciones de Ruhani por exigencias del Fondo Monetario Internacional para préstamos con el fin de garantizar las inversiones extranjeras, entre otras cosas, provocaron que tan solo el año pasado la hegemonía de los reformistas se viniera a pique sobre todo en la clase trabajadora, con huelgas en la industria petrolera (estatal aun), automotriz controlada por transnacionales europeas, ingenios de azúcar y otros sectores. La explosión en una mina y la muerte de 40 mineros y la visita de Rohani a la tragedia provocó airadas protestas de los sobrevivientes y familiares de los muertos.

En un escenario de aumento constante de los precios de primera necesidad, en un país donde 40 % se encuentra en la pobreza, se generaron protestas en las principales ciudades del país, al grado que en bastiones de la teocracia como la ciudad santa de Qum y en pequeñas ciudades obreras, que no se levantaron en 2009, obreros, estudiantes y desempleados se enfrentaron con la policía y la Guardia Revolucionaria, provocando 20 muertos y 3,700 detenidos; la participación de mujeres jóvenes también fue importante en un país donde éstas son considerados según el Islam propiedad de los hombres.

La reacción del régimen fue de represión, pero cuando los manifestantes asumieron consignas contra los mullah y el Ayatollah Ali Khamendi y la quema de comisarías, la respuesta fue las



acusaciones a Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos de estar atrás de las protestas y la oferta de diálogo. Por supuesto no se descarta la presencia de agentes extranjeros, el uso de corrientes reaccionarias como los monarquistas o de grupos fundamentalistas suníes apoyados por Washington y Riyadh.

En un primer momento se mencionó que los conservadores impulsaron las protestas, pero cuando éstas adquirieron un tono contra el régimen, en su conjunto se sumaron a los reformistas y al gobierno contra los manifestantes. Paralelamente Trump, Macron, el canciller británico y alemán, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea hipócritamente, aprovecharon para exigir respeto a los derechos humanos.

Pero la estrategia de EU y Europa se bifurca, mientras que el primero presiona más a Teherán, Bruselas junto a Beijín y Moscú, están por mantener el acuerdo en materia nuclear y se presenta una serie de inversiones de parte de empresas como Total de Francia, Gazprom de Rusia, Volkswagen, OMV de Austria o la china CNC en exploración petrolera, automotriz, infraestructura respectivamente. El discurso altisonante de Trump sobre mayores sanciones a Irán -que en su visita a Arabia Saudita acusó de Irán de promover el terrorismo y apoyar a la reaccionaria monarquía wahabita con la venta de una cantidad millonaria de armas- ha envalentonado al interior de Irán al régimen, desmontando por ahora las protestas.

La izquierda por su parte, encarnada en el Tudeh, el estalinista Partido de los Trabajadores Tofuan, sindicatos como de choferes de buses de Teherán, el Sindicato Libre Unido, la Asociaciones de Electricistas y Trabajadores del Metal, el Centro de defensores Laborales y la Alianza de Socialistas Sirios e Iraníes, han apoyado y sumado a las protestas y denunciado el intervencionismo de Estados Unidos y otras potencias. Tendrían que conformar sobre todo en las ciudades levantadas comités de barrios y empresas, para disputarle el poder a la teocracia y las distintas corrientes burguesas y evitar que el imperialismo intervenga desviando rebeliones como en Libia, Irak y Siria o respaldando a gobiernos afines a sus intereses como Egipto, Turquía, Jordania, Arabia Saudita, Bahréin, Marruecos, el mismo Israel.

Por supuesto que esto pasa por el derecho a la autodeterminación del pueblo kurdo dividido en cuatro países, Siria, Turquía, Irak e Irán, sobre el fetichismo de la unidad de estos países producto de las fronteras coloniales que las burguesías árabes aprovecharon y que la izquierda mundial con el respaldo de Rusia defiende, así como de otras minorías en Irán como los árabes suníes de Juzestán y otras provincias al sur, azeríes fronterizos con Azerbaiyán y minorías religiosas como los zoroastros, judíos y cristianos.

LA REVOLUCIÓN ALEMANA DE 1918 (I PARTE)

Por Fernando Claudín

En el verano de 1918, la situación militar en Alemania se hace desesperada. El mariscal Hindenburg, comandante supremo, el general Ludendorff y su Estado Mayor, que hasta ese momento prometían la victoria a una población extenuada, deciden en secreto que ha llegado la hora de negociar la paz y lo hacen saber al emperador del Reich, Guillermo II.

Su preocupación máxima es impedir que la derrota desemboque en revolución, como había sucedido en Rusia el año anterior, y al mismo tiempo quieren escapar a sus grandes responsabilidades en la catástrofe.

Para conseguir estos fines deciden pasar el poder, que, de hecho, venían ejerciendo dictatorialmente en el curso de la guerra, a los partidos políticos con más implantación social, interesados también en evitar la revolución: el SPD (Partido socialdemócrata alemán), el llamado Centro (Partido del Centro Católico) y el Partido Demócrata. Los dos últimos de carácter burgués liberal.

Este paso del poder militar a un gobierno parlamentario se inicia el 3 de octubre con el nombramiento del príncipe Max de Baden como canciller del Reich, teniendo como secretario de Estado a Scheidemann (socialdemócrata), Erzberger y Grober (centro) y Haussmann (demócrata).

El nuevo equipo inicia las negociaciones con los aliados para llegar a un armisticio, pero los acontecimientos se precipitan. La temida revolución irrumpe en escena con la sublevación de parte de la flota de guerra en los últimos días de octubre. Del 5 al 9 de noviembre se extiende a toda Alemania como mancha de aceite. El 9 abdica el emperador, cuando ya la república ha sido proclamada en Munich y Berlín. Pero la socialdemocracia consigue controlar la situación impidiendo que siga el camino de la revolución rusa.

Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, el SPD adoptó la política llamada de unión sagrada — colaboración con la monarquía y el generalato para llevar a cabo la guerra, incumpliendo los acuerdos de los congresos de la II Internacional de oponerse a ella por todos los medios.

Los Espartaquistas



Sólo un pequeño grupo de la izquierda del partido, agrupado en torno al diputado Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Franz Mehering, Clara Zetkin, Leo Jogiches y otros conocidos militantes revolucionarios, mantiene en alto la bandera internacionalista.

A partir de 1916 este grupo es conocido con el nombre de Spartakus, o de espartaquistas porque inicia la publicación de una revista con el nombre de Cartas de Spartakus en recuerdo simbólico del jefe de la más famosa revolución de esclavos bajo el Imperio romano.

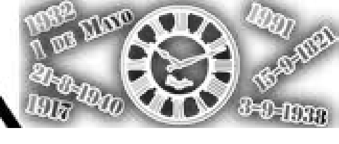
En abril de 1917 tiene lugar la escisión del SPD. Una impo-nante minoría, al frente de la cual figuran personalidades tan relevantes como Kautsky y Bernstein, funda el USPD (Partido Socialdemócrata Independiente alemán), que se opone a la continuación de la guerra y preconiza una paz negociada. Los espartaquistas deciden integrarse en este partido, aunque juzgan vacilante y demasiado moderadas las posiciones de sus dirigentes.

Después de la escisión, el SPD conserva cerca de 250.000 afiliados (sin contar los movilizados en el Ejército), cuenta con 74 diarios y revistas en toda Alemania y controla los sindicatos. El USPD agrupa a unos cien mil afiliados y dispone de 14 publicaciones. Los espartaquistas no pasan de unos millares de militantes, según las cifras más optimistas, y su influencia es extremadamente reducida. La gran mayoría de la clase obrera alemana y los sectores de las capas medias, que en las elecciones de 1912 habían dado al SPD el grupo más importante del Parlamento, compartían el fervor nacionalista del conjunto de la sociedad alemana, y sólo al final de la guerra evolucionaron hacia las posiciones pacifistas reflejadas en el USPD.

Sin embargo, las grandes pérdidas en vidas humanas, las privaciones materiales en aumento y el impacto de la revolución rusa, fueron engendrando un descontento creciente en el pueblo alemán.

En 1917 se produjo un primer motín en la flota de guerra. En enero de 1918 tuvo lugar una huelga general en gran número de ciudades, formándose los primeros consejos obreros a semejanza de los soviets (consejos) rusos.

El Gobierno respondió intensificando la represión en los medios obreros y en



las unidades militares, sin poder impedir nuevas huelgas, como las de abril de 1918 en Berlín, organizada por la red clandestina de los llamados delegados revolucionarios, militantes obreros que gozaban de la confianza de sus compañeros en las fábricas de la capital. Esta organización de los obreros de Berlín funcionaba independientemente de los partidos, aunque en ella predominaban los militantes del USPD, y desempeñó un papel importante en la revolución alemana.

La sublevación, iniciada el 30 de octubre, de las tripulaciones de los barcos de guerra anclados en la rada de Kiel —provocada por el temor a ser utilizados en nuevas operaciones bélicas cuando ya era del dominio público que la guerra estaba perdida— sirve de detonador a la acumulación de descontento y al ansia de paz que invade a la sociedad alemana, reemplazando al belicismo nacionalista que existía en el período anterior.

La revolución toma la forma de un movimiento espontáneo, de masas, que conquista la calle, enfrentándose en algunos casos con destacamentos de la policía o del Ejército, aunque, por lo general, la resistencia de las autoridades establecidas es mínima. De Kiel, la revolución gana Hamburgo, Lübek, Holstein, Schwerin, Hannover, Brunswick, Colonia, Munich, Oldenburg, Rostock, Magdeburg, Halle, Leipzig. Dresden, Düsseldorf, Stuttgart, Nuremberg, etcétera.

El 9 de noviembre llega a Berlín. Preparada por los delegados revolucionarios, una inmensa manifestación, partida de las fábricas y las barriadas obreras, confluye sobre el centro de la capital.

La guarnición permanece pasiva o se une a los manifestantes. Refugiado en el Cuartel General, Guillermo II se resiste a abdicar, pero Hindenburg y los generales le informan que no puede contar ya con el Ejército. El dirigente del SPD, Scheidemann, anuncia en el Reíchstag la instauración de la República alemana. Dos horas más tarde, Liebknecht proclama ante los manifestantes la República socialista libre de Alemania. Muy pronto quedará en claro que la situación real respondía a la declaración de Scheidemann.

Acomodamiento del SPD

Colocada ante el hecho revolucionario, la dirección del SPD opta por ponerse a su cabeza para mejor controlarlo e impedir que tome el camino ruso. En las semanas precedentes, los dirigentes socialdemócratas habían intensificado su permanente campaña contra la revolución bolchevique.

La revolución rusa ha anulado la democracia y establecido en su lugar la dictadura de los consejos de obreros y soldados. El Partido Socialdemócrata rechaza, sin equívocos, la teoría y el método bolcheviques para Alemania y se pronuncia por la democracia —declaraba el Worwarts, órgano central del SPD, el 21 de octubre.

El surgimiento, de la noche a la mañana, de consejos de obreros y soldados en toda Alemania, no obedece, desde luego, a consignas del SPD. Es una creación espontánea de las masas, influidas, sin duda, por el ejemplo ruso —y muy secundariamente, en algunos casos, por el activismo de la izquierda revolucionaria—, pero al mismo tiempo esos consejos son mayoritariamente socialdemócratas en su composición y en sus aspiraciones, reflejando un dato básico de la nueva situación: la gran mayoría de los obreros, sin hablar ya de los campesinos y las capas medias urbanas se sentía identificada con los objetivos proclamados por el SPD bajo la presión del movimiento revolucionario: conclusión inmediata de la paz, abolición de la monarquía, instauración de la república democrática parlamentaria, mejoramiento de la situación económica, reformas sociales, etcétera.

La dirección del SPD decía también que estaba de acuerdo en ir hacia el socialismo, pero por cauces democráticos y pacíficos. Y para completar su hábil acomodamiento a la nueva situación política, levanta la bandera de la unidad socialista (reunificación del SPD y del USPD), encontrando la aprobación entusiasta de las asambleas multitudinarias que se suceden incesantemente.

En cambio, los espartaquistas y otros grupos de la izquierda revolucionaria, secundados en cierta medida por el ala izquierda del USPD, llaman a las masas a profundizar la revolución y transformarla en socialista, a instaurar la dictadura del proletariado, explicando —cosa, por lo demás evidente— que para alcanzar tales objetivos es necesaria la lucha armada contra los partidos de la burguesía y sus fuerzas militares, contra los propios dirigentes del SPD, a los que califican de traidores y contrarrevolucionarios.

Proponían, en definitiva, la guerra civil —incluso dentro del propio movimiento obrero— con su inevitable cortejo de víctimas humanas y sacrificios materiales. No es sorprendente que la política del SPD prevaleciera cada día más, como se reflejó en el primer congreso de los consejos de obreros y soldados de toda Alemania reunidos del 16 al 20 de diciembre.

De 480 delegados, 292 pertenecen al SPD, 84 al USPD, 11a un grupo de extrema izquierda llamado Unión de revolucionarios, y sólo 10 a la Liga Spartakus (el grupo Spartakus había adoptado esta denominación el 11 de noviembre).

Entre el 9 y el 10 de noviembre, la dirección del SPD consigue imponer dos iniciativas políticas de gran importancia para asegurar su papel hegemónico. Por un lado, que el príncipe Max de Bade, máxima autoridad legal después de la abdicación de Guillermo II, traspase todos los poderes al socialdemócrata Eben, convertido así en canciller legal, lo cual tenía indudable relevancia de cara a las clases dominantes y al Ejército.

Por otro lado, la dirección del SPD consigue que la dirección del USPD acepte formar un gobierno socialista paritario SPD-USPD, lo cual tenía aún mayor relevancia de cara a los obreros, soldados, oficiales y otros actores populares protagonistas del movimiento revolucionario, para acreditar la disposición del partido mayoritario de la socialdemocracia a realizar los objetivos de la revolución en una línea democrática y pacífica.

En la tarde del 10 de noviembre tiene lugar en el circo Busch de Berlín una asamblea general de los consejos de obreros y soldados de la capital. Ebert es acogido con una tempestad de aplausos cuando anuncia que para poner fin a la lucha fratricida entre socialistas se ha llegado a un acuerdo entre el SPD y el USPD, formándose un Gobierno con tres representantes de cada partido. Ahora —dice—se trata de asegurar en común la reconstrucción de la economía según los principios del socialismo ¡Viva la unidad de

la clase obrera alemana y de los soldados alemanes, viva la República social de Alemania.!

Grandes aclamaciones acogen esta declaración. En cambio, Liebknecht, pese a su indudable popularidad por su oposición a la guerra, es acogido con hostilidad cuando declara que la revolución está amenazada no sólo por los que antes tenían el poder —junkers, capitalistas, imperialistas, monárquicos, príncipes o generales—, sino también por los que hoy marchan con la revolución y ayer eran sus enemigos (es decir, los dirigentes del SPD).

La mayoría de la asamblea se levanta indignada gritando: ¡unidad!, ¡unidad! y exigiendo que Liebknecht abandone la tribuna. El líder espartaquista está a punto de ser agredido por los delegados de los consejos de soldados cuando declara que los enemigos de la revolución utilizan pérfidamente para sus propios fines la organización de los soldados, aludiendo con ello al predominio que en los consejos de soldados, más aún que en los consejos obreros, tenían los socialdemócratas del SPD y otros elementos aún más moderados, sobre todo entre los oficiales que se habían sumado al movimiento. (Aunque se denominaban consejos de soldados, estos organismos incluían también algunos oficiales, incluso de alto grado, pasados al campo republicano.)

Consejo de Comisarios

En conclusión, la asamblea ratifica por una gran mayoría el órgano supremo de poder propuesto por Ebert, que para sintonizar mejor con los consejos de obreros y soldados recibe el nombre de Consejo de Comisarios del Pueblo, igual que el órgano de poder surgido de la revolución bolchevique de octubre de 1 917. No hace falta insistir en que la semejanza sólo era nominal.

El Consejo de Comisarios del Pueblo, formado por los social-demócratas Ebert, Scheidemann y Landsburg, del SPD, y Hasse, Dittmann y Barth, del USPD, forma un Gobierno en el que, con el argumento de mantener la continuidad administrativa, permanecen los antiguos ministros o son reemplazados por funcionarios del mismo corte. Cada ministro es asistido por dos subsecretarios de Estado, uno del SPD y otro del USPD.

Esta continuidad a nivel gubernamental va acompañada de la de todo el anterior aparato burocrático del Estado, así como del aparato militar. De hecho, se crea una dualidad de poder: de un lado, la pirámide de consejos de obreros y soldados, que se constituye formalmente en el ya citado congreso de diciembre, y de otro el anterior aparato burocrático y militar que se conserva en lo esencial. Pero esta dualidad es más aparente que efectiva, dada la subordinación de los consejos a la dirección del SPD.

Por otra parte, la política de Ebert se orienta cada vez más por el camino de las componendas con el viejo aparato estatal, en particular con su estamento militar, viendo en él la fuerza capaz de hacer frente, en caso de peligro, al ala bolchevizante del movimiento revolucionario.

Las primeras medidas del Consejo de Comisarios del Pueblo consisten en la firma del armisticio (11 de noviembre); un llamamiento al país garantizando las libertades públicas, prometiendo la jornada de ocho horas a partir del 1 de enero de 1919, reformas sociales, remedios contra el paro, etcétera; el sufragio universal y el voto secreto en todas las elecciones a las instituciones representativas, la convocatoria de elecciones a la Asamblea Nacional; formación de una comunidad de trabajo entre patronos y obreros para dirimir todos los conflictos por negociarse y convenios colectivos; la creación de una guardia nacional acompañada de la orden a todos los particulares de entregar las armas en su poder, so pena de cinco años de prisión, medidas ambas dirigidas contra la izquierda revolucionaria que se preparaba para la lucha armada, etcétera.

Esta izquierda revolucionaria está constituida, principalmente, por una fracción del USPD, con base sobre todo entre militantes de filas y cuadros intermedios, mientras la mayoría de los altos dirigentes se alinean cada vez más con los del SPD; por grupos como el de los delegados revolucionarios de las fábricas de Berlín y otros y otros grupos similares con rasgos específicos en diversos puntos de Alemania; y, finalmente, por los espartaquistas, el grupo que adquirirá más renombre, debido a la personalidad de sus dirigentes y al trágico final de los más célebres entre ellos —Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg—; al hecho de ser el núcleo fundador del Partido Comunista alemán, y, finalmente, a su protagonismo en la insurrección de enero de 1919 contra el Gobierno Ebert.

A finales de diciembre la Liga Spartakista lanza un ultimátum a la dirección del USPD, dentro del cual aún permanecen, confiando en obtener el apoyo del ala izquierda de este partido, y en caso de escisión que la misma se reagrupará con la Liga. Pero este cálculo fracasa. La dirección del USPD rechaza el ultimátum y el 98 por 100 de su base obrera permanece en las filas del partido, haciendo oidos sordos a la solicitación de los espartaquistas.

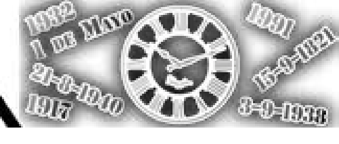
En las Navidades, la Liga espartakisra celebra una conferencia nacional en la que decide salir del USPD y formar un partido independiente junto con otros pequeños grupos —especialmente el de Bremen— que se consideran ya comunistas.

El 30 de diciembre se celebra el congreso fundacional del nuevo partido, que adopta el nombre de Partido Comunista alemán (Liga Spartakus). Por sus siglas alemanas: KPD (Spartakusbund). En total no pasa de unos miles de militantes en toda Alemania, con algunos grupos importantes en Chemnitz y en el distrito de Wasserkante, pero sólo 50 militantes en Berlín.

Como constata el historiador marxista Arthur Rosemberg, es una organización clandestina aislada, sin forma sólida. Carece, en efecto, de estructuras firmes y de cohesión ideológica. Sin embargo, su influencia en el ala más radical de la revolución alemana sobrepasa con mucho a sus efectivos numéricos, y en algunos momentos consigue movilizar masas importantes. Cuenta con un diario, Die Rote Fahne (La Bandera Roja), cuya publicación se había iniciado el 9 de noviembre.

En el congreso fundacional del KPD se manifiestan divergencias ideológicas y políticas entre un núcleo de dirigentes, que comparten las posiciones teóricas de Rosa Luxemburg, y otros militantes, generalmente jóvenes, con escasa formación marxista, que se inclinan al extremismo y son más proclives al ejemplo bolchevique, interpretándolo además de una forma simplista.

Piensan que el poder debe



conquistarse, aunque los revolucionarios sean una minoría. No tienen en cuenta que en Rusia las consignas de paz y tierra habían dado a los bolcheviques el apoyo mayoritario de los soviets de obreros, campesinos y soldados, decepcionados por la política de los demás partidos que proseguían la guerra y no daban la tierra, mientras que en la Alemania de la revolución de noviembre la paz era ya un hecho y los campesinos representaban una fuerza conservadora.

Rosa Luxemburg, en cambio, planteaba la lucha por el poder revolucionario, pero sobre la base de ganar previamente el apoyo mayoritario de las masas trabajadoras, que por el momento confiaban en la socialdemocracia. La tarea inmediata del KPD debía consistir, sostenía, en impulsar las luchas parciales de los trabajadores y difundir entre ellos el programa comunista.

Estas divergencias estratégicas se tradujeron en divergencias tácticas acerca de una cuestión crucial: la actitud que el KPD debía adoptar ante las elecciones para la Asamblea Nacional. Rosa Luxemburg, Liebknecht, Jogiches, Paul Lcvi y otros de los principales dirigentes defendían la participación, pero su posición fue derrotada por los extremistas del partido. Esta actitud de boicot a las elecciones resultaba incomprensible para la inmensa mayoría del pueblo alemán y no podía por menos de aislar aún más a los espartaquistas.

El riesgo de un choque decisivo entre la izquierda revolucionaria y el Gobierno Ebert se acrecentaba cada día. Ya en diciembre se habían producido enfrentamientos sangrientos entre los sectores más radicalizados de los obreros y soldados y las fuerzas represivas que el Gobierno organizaba aceleradamente en colaboración con los jefes militares.

A finales de diciembre se produce una crisis en el Consejo de Comisarios del Pueblo. Los tres representantes del USPD dimiten por desacuerdo con la política militar y la política económica de Ebert. Al tomar esta decisión, la dirección del USPD se hace eco del descontento creciente dentro de su partido y en las masas obreras y quiere evitar que la izquierda revolucionaria lo capitalice.

La crisis gubernamental agrava la situación política. Ebert sustituye a los dimisionarios por tres miembros del SPD, entre ellos Noske. A principios de enero de 1919, el Gobierno decide destituir al prefecto de policía de Berlín, Eichhorn, perteneciente al ala izquierda del USPD, considerado demasiado radical.

El comité berlinés del USPD, los delegados revolucionarios y el KPD (Liga Spartakus) convocan una manifestación de protesta que tiene lugar el 5 de enero con cientos de miles de participantes. Los representantes de las tres organizaciones convocantes, entre ellos Liebknecht por los espartaquistas, deciden proseguir la acción hasta derrocar al Gobierno.



Entretanto, los manifestantes ocupan los locales de varios diarios, entre ellos el de Vorwärts, órgano del SPD, y algunas dependencias gubernamentales como la agencia de noticias Wolff. Eichhorn no acata la destitución y sigue al frente de la prefectura de policía.

Se crea una comisión revolucionaria presidida por Ledebour (izquierda del USPD), Scholze (delegados revolucionanos) y Liebknecht (espartaquistas), que proclama la lucha por el poder, declara la huelga general y llama a una nueva manifestación para el día siguiente.

En este día, 6 de enero, se distribuye una hoja socialdemócrata que llama a los obreros, soldados y ciudadanos a oponerse a los bandidos de la Liga espartaquista. El Gobierno da plenos poderes a Noske para organizar la represión en colaboración con los jefes militares, utilizando para ello los llamados cuerpos francos, creados desde mediados de diciembre con oficiales de confianza y voluntarios reclutados a sueldo.

Uno de los principales jefes de estos cuerpos francos, el general Maercker, arengaba así a sus hombres: “Yo soy un viejo soldado. Durante treinta y cuatro años he servido a tres emperadores. Amo y venero a Guillermo II, igual que el día en que le presté juramento. Pero ahora el Gobierno imperial ha sido reemplazado por el del canciller Ebert. Y este Gobierno se encuentra hoy en una situación muy difícil. Esa Rosa Luxemburg es una mujer diabólica y Karl Liebknecht un tipo decidido a jugarse el todo por el todo”.

Al mismo tiempo que continúan las manifestaciones y choques sangrientos en Berlín, los dirigentes del USPD entablan negociaciones con el Gobierno Ebert. La dirección del KPD (Liga Spartakus) se divide sobre la táctica a seguir.

Una minoría, encabezada por Liebknecht, es partidaria de pasar a la ofensiva e intentar por las armas el derrocamiento del Gobierno. La mayoría, encabezada por Rosa Luxemburg, considera que no hay ninguna probabilidad de éxito, y que aun en el caso de triunfar en Berlín éste quedaría aislado, repitiéndose la tragedia de la Comuna de París.

Sin embargo, la mayoría no impone resueltamente su criterio, contemporiza con Liebknecht. Radek, que había llegado a Berlín como representante del Partido Bolchevique en el congreso fundacional del KPD, y se encuentra aún en la capital, aconseja a la djrección espartaquista anunciar públicamente que deben cesar los combates.

PRÓXIMAS ELECCIONES: LLAMAMOS A LA ABSTENCIÓN ELECTORAL

El domingo 4 de febrero del año 2018 se realizarán las elecciones nacionales en Costa Rica, para elegir al presidente de la República, dos vicepresidentes y 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Se presentan 13 partidos políticos en la contienda electoral para la presidencia de la República y muchos otros partidos políticos provinciales en la elección de diputados.

Situación económica-política

El crecimiento económico de Costa Rica es endeble. El año pasado el Producto Interno Bruto (PIB) fue de apenas de 3,6%, mientras que el déficit fiscal llegó hasta el 6%, lo cual ha generado, en algunas situaciones, problemas de financiamiento del gobierno para pagar la planilla de los empleados públicos, así como realizar transferencias a algunas instituciones de bien social, tales como al Patronato Nacional de la Infancia, becas estudiantiles y otros programas. Por otro lado, aparejado al crecimiento del déficit fiscal se encuentra el aumento del endeudamiento tanto interno como externo, el cual están llegado casi al 60% del PIB. Este incremento de la deuda externa hace que gran parte del presupuesto de la República, que se financia en un 45% con deuda, se destine al pago de los intereses, restando capacidad para financiar obras de inversión, disminuyendo el gasto del gobierno e imponiendo, desde hace varios años, a los trabajadores del gobierno, una política de congelamiento salarial.

La tasa de desempleo sigue alta, ubicándose de forma casi permanente en más del 9%, mientras el desempleo ampliado crece, igual crece el subempleo y el sector informal de trabajadores que llega casi a un 50%. El desempleo, el subempleo y la informalidad se han convertido, igual que la pobreza, en problemas estructurales del capitalismo en Costa Rica. Además, existen más de 200 mil desempleados y también se encuentran unos 250 jóvenes NINIS que ni trabajan ni estudian. Estos problemas estructurales, aparejados a la desigualdad social que hacen que una pequeña minoría de personas sean multimillonarios y decenas de miles vivan en la miseria y degradación creciente, se han convertido en el caldo de cultivo para el crecimiento inusitado de múltiples bandas de narcotraficantes que controlan y lucha entre sí por los mercados y territorios. Cientos, sino miles de jóvenes son reclutados por el narcotráfico para convertirse en gatilleros. Esto ha llevado a convertir Costa Rica en el segundo país de Centroamérica con la más alta tasa de homicidios, después de El Salvador. Costa Rica se encuentra actualmente en un profundo proceso de descomposición social, lo cual tendrá repercusiones inmediatas en la democracia burguesa. La historieta inventada por las clases dominante de que Costa Rica es un país pacífico es desmentida con creces por la ola de violencia y asesinatos cotidianos en varios barrios de la capital y en otras provincias.



La corrupción dentro del aparato del Estado, en las diversas instituciones estatales y en los tres poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se ha convertido, desde hace algunos años, en un grave problema crónico. De hecho, es un asunto y problema estructural del capitalismo en Costa Rica. El caso de corrupción del "Cementazo" sacó a luz pública toda la podredumbre que existe en los tres poderes de la República. Miembros de los tres poderes de Estado hicieron unidad de acción para contribuir a saquear los dineros públicos de la banca estatal para favorecer al empresario Juan Carlos Bolaños.

El gobierno del PAC

El Partido Acción Ciudadana (PAC) llegó al poder en el año 2014 de forma inesperada, ilusionando a miles de votantes con su planteamiento de un "cambio". En ese momento, la mayoría de la población costarricense se encontraba desilusionada de los partidos del bipartidismo (PLN y PUSC) que se habían alternado el poder durante 60 años. Sin embargo, después de cuatro años en el poder el PAC se convirtió en una estafa política de la mayoría del electorado que votaron por ese partido creyendo que iban a vivir mejor y que habría un cambio de la forma tradicional de hacer política. El PAC en el poder no hizo ninguna obra social, económica y de



inversión significativa. Todo lo contrario, con el caso del "Cementazo" todos los integrantes del PAC en los diferentes poderes del Estado salieron involucrados en ese sonado caso de corrupción. De ahí que una gran parte de la población se encuentra desilusionada tanto con ese partido llamado emergente, como con los partidos tradicionales. ¿Entonces, cuáles son las perspectivas y tendencias en el proceso electoral actual? Seguidamente planteamos algunos posibles escenarios.

¿Hacia dónde va el proceso electoral?

Grandes sectores de la población han agotado su experiencia política-electoral con los partidos tradicionales (PLN y PUSC) y recientemente con el partido "emergente" PAC, por eso giran, dan la espalda, y buscan nuevas opciones o alternativas en la oferta electoral que se presenta, en la competencia por el poder político o bien incrementan el abstencionismo, porque muchos no ven ni encuentran una opción política atractiva y creíble. Debemos aclarar que los partidos tradicionales no han muerto, han recibido fuertes reveses en contiendas anteriores, pero frente a la nueva experiencia con el PAC pueden resurgir. Conforme las encuestas que se han realizado hasta el momento, el porcentaje de abstención se encuentra en un 40% aproximadamente y el nivel de gente indecisa está en 35%. Normalmente, lo indecisos deciden votar en los últimos días de la campaña electoral, lo cual puede inclinar la balanza a favor de uno u otro candidato. La gran área metropolitana (GAM), integrada por las provincias de San José, Cartago, Alajuela y Heredia, concentra la mayor cantidad de votantes, jugando también un rol decisivo en la elección de presidente y diputados.

Los grandes problemas a los que se enfrenta la población en la vida cotidiana, tales como la inseguridad ciudadana debido al crecimiento espectacular de la violencia, producto del creciente narcotráfico; el aumento del desempleo, principalmente entre los jóvenes, mujeres y hogares en pobreza, el incremento del subempleo, la informalidad y otros males sociales, ha posibilitado que un gran sector de la población esté girando, en su intención de voto en casi todas las encuestas, hacia Juan Diego Castro, candidato a presidente por el Partido Integración Nacional (PIN), una agrupación pequeña y sin estructuras ni gente para formar un gobierno. Es importante señalar que este personaje fue ministro de seguridad del gobierno del PLN encabezado Figueres en los años 90.

Este sujeto aspira a jugar un rol bonapartista, es decir, que si llega al gobierno aspira y pretende gobernar por decretos, así como imponer mano dura, léase represión, para resolver, entre otros, el problema de la inseguridad y la delincuencia. Juan Diego Castro, además de tener tendencia al autoritarismo y ser una personalidad díscola e inestable, es políticamente impredecible, lo cual provoca temor entre sectores burgueses y en los dueños de los grandes medios comunicación como La Nación, periódico que, en caso de llegar al poder, ha prometido cerrar en su primer año de gestión. ¿Por qué un gran sector de la población gira electoralmente, según las encuestas, hacia Juan Diego Castro? Porque promete mano dura contra las bandas del narcotráfico, eliminar las pensiones de lujo y terminar con la corrupción, entre otras medidas que plantea de forma demagógica. Grandes sectores de la población, producto de la situación económica, social y política, andan buscando que gobierne un hombre fuerte. La democracia burguesa costarricense está en profunda crisis. De esas condiciones y situación existentes, surge la figura de Juan Diego Castro como una eventual alternativa de poder.



De lo planteado anteriormente no se deriva ni se concluye que Juan Diego Castro ganará inevitablemente va a ganar las elecciones Castro, sino que es una posibilidad abierta en el actual proceso electoral. En todas las encuestas, aunque no debemos confiar mucho en ellas, aparecen con porcentajes de intención de votos similares los candidatos Juan Diego Castro del PIN, Antonio Álvarez Desanti del PLN y Rodolfo Piza del PUSC. La diferencia entre ellos ha sido que mientras Desanti ha venido disminuyendo en las encuestas, Castro ha subido. Sin embargo, de forma sorpresiva en algunas encuestas ha subido en la intención de voto el candidato Piza del PUSC. En cuarto lugar, ha aparecido, en algunas encuestas, el candidato Rodolfo Hernández del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC). Más abajo aparece Carlos Alvarado del PAC y más abajo aparecen los demás candidatos. La última encuesta del seminario Universidad de la UCR, plantea un empate entre Juan Diego Castro del PIN y Fabricio Alvarado, un evangélico ultraconservador, del Partido Restauración Nacional (PRN). Lo anterior confirma el auge de partidos ultras y minoritarios, en detrimento de los partidos tradicionales.

Es importante destacar que el candidato del PAC, actual partido en el poder, no tiene posibilidades de ganar las elecciones presidenciales, dado que este partido hizo un pésimo gobierno, desencantó a miles de votantes y su gobierno se encuentra desprestigiado. El partido Frente Amplio (FA), izquierda reformista, que junto al PAC fueron las novedades de las elecciones del año 2014,

en casi todas las encuestas ni siquiera obtiene el margen de error de ellas. Esta eventual debacle política-electoral del FA se debe a su política de colaboración que mantuvo con el gobierno del PAC a lo largo de los últimos cuatro años. Esta abyección se va a manifestar en una disminución importante en la cantidad de sus diputados. Por otro lado, el FA no tuvo una política de oposición de izquierda en ningún momento frente al gobierno, mucho menos de convocar a la movilización a las masas trabajadoras para luchar en contra de las políticas anti-obreras del gobierno.

Los partidos evangélicos (PRN y PRC) para tratar de ganar votos y obtener más diputados, han recurrido a los ataques más virulentos contra el movimiento de diversidad sexual, a la "ideología de género", la cual dicho sea de paso no existe, así como a los ataques del matrimonio entre parejas del mismo sexo que una sentencia-consulta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impuso a Costa Rica y otros países latinoamericanos. A esta jauría contra los derechos de la población de la diversidad sexual se le ha sumado el PLN y otros partidos burgueses.

Izquierda sectaria y divisionista con programa mínimo democrático

Al final, debemos mencionar al Partido de los Trabajadores (PT) encabezado por su candidato presidencial John Vega. Este candidato y su partido se presenta como una opción de izquierda, socialista y de los trabajadores. Sin embargo, el programa enarbolado por el PT, aunque lleva incluido algunas frases sobre el socialismo y el gobierno de los trabajadores, en realidad enarbola un programa mínimo democrático: sindicatos por empresa para luchar por mejores condiciones de trabajo, reducción de la jornada de trabajo a 40 horas sin reducir el salario, prohibición de despedido a los trabajadores, aumento general de salarios, guarderías para las mujeres que trabajan, no pago de la deuda publica e impuestos a los más ricos, etc. Mas que la plataforma política de un partido que se reclama de izquierda, parece la plataforma de un sindicato. Pero, incluso, aunque tuviera un programa impecable, debemos analizar su comportamiento político en lo cotidiano.

El PT y su candidato John Vega han mantenido una política oportunista, sectaria y divisionista en el seno del movimiento magisterial, apoyando primero a la burocracia sindical del grupo Honestidad y luego, aunque rompen con ese sector burocrático, dividen a la oposición sindical en las elecciones, sirviendo con su política a los intereses de las otras alas de la burocracia sindical. Por otra parte, en el seno de los trabajadores del sector sindical, principalmente, agrícola impulsa y mantiene una política de construir sindicatos "rojos y únicos" como el Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP), como que



la clase trabajadora fuera compuesta de forma única y como que el sindicato fuera del partido, política que ha expuesto, con despidos, a muchos dirigentes trabajadores sindicales a la represión patronal y del gobierno. En su Facebook, John Vega, haciendo seguidismo al electoralismo burgués, señala que "Ya que varios candidatos andan presentando su equipo, pues acá les presento parte de mi gabinete compuesto por obreros de la construcción y empleadas domésticas…". Las campañas electorales deben servir para denunciar al sistema capitalista con todas sus lacras sociales, opresión y sus diversas formas de explotación, así como plantear un programa revolucionario de reivindicaciones transitorias que se oriente a la destrucción del sistema capitalistas y su suplantación por una sociedad socialista. Ese programa de transición no existe, en cambio, como lo vieja socialdemocracia, han levantado un programa mínimo democrático, que no plantea la salida a los grandes problemas que sufren los trabajadores de Costa Rica. Andar presentando "gabinetes de gobierno" es caer en el juego electorero de la derecha y la burguesía e incluso engañar a los trabajadores honestos.

Abstención: no hay por quien votar

De último, la tendencia actual parece indicar que en primera ronda ninguno de los candidatos que se encuentran mejor posicionados obtendrían el 40% de los votos para ganar, entonces lo más probable es que se realicen la segunda vuelta electoral en el mes de abril.

Los partidos de derecha que tienen la posibilidad de ganar, ya sea en la primera o segunda ronda, representan los intereses de los empresarios y, en caso de ganar cualquier variante, buscara como aplicar el plan de ajuste salvaje en contra de los trabajadores que se ha pospuesto por cuestión electoral, ya que ninguno de ellos quiere perder votaciones. Por el lado de la izquierda, no se trata de votar por el menos malo, por el mal menor, sino como educar a la vanguardia de los trabajadores costarricenses en los principios del socialismo y de la lucha de los trabajadores

Con base en todas las consideraciones anteriores, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a todos los trabajadores, sectores populares y sociales de Costa Rica, a protestar masivamente anta la decadencia de la democracia burguesa, rechazando a los partidos que se presentan, llamando a la abstención electoral, porque consideramos que estas elecciones no hay opción política que represente globalmente los intereses de los trabajadores y los pobres.

Centroamérica, 23 de enero del 2018

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)





LOS EFECTOS DEL FIN DEL TPS

Por: Bartolo Gonzales.

En El Salvador se generó incertidumbre después que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunciara el fin del Estatus de Protección Temporal en el que se encuentra amparados más de 2000, 000 salvadoreños. Las remesas en El Salvador son un importante soporte a la pobre economía; por ejemplo, el año pasado constituyeron el 15.8 % del Ingreso Nacional Bruto, INDB ($5. 021.3 millones de dólares).

La repatriación o deportación de nuestros hermanos significaría una disminución en el índice económico, agravando más la crisis económica. Esto se da en plena coyuntura electoral, estamos a las puertas de las elecciones de alcaldes y legislativas, y dentro de un año la elección presidencial, por tanto el tema del fin del TPS se ha trasladado al proselitismo electoral. Eso ocurre bajo el Gobierno del FMLN, sobre quien llovieron críticas por haber expresado como "un éxito", atribuido a su gestión, la prórroga de un año concedido por el gobierno de Estados Unidos a los trabajadores salvadoreños, supuestamente para que realicen trámites de residencia por su cuenta. Dicha prórroga no es producto de la gestión del FMLN, sino que es parte del procedimiento de la DHS. El FMLN necesita dar respuestas creíbles en medio de la campaña electoral, por lo que, en su desesperación, ha asegurado conseguir un TPS con Qatar, país del Medio Oriente

La vida corta del TPS y algunas consideraciones

El TPS es un beneficio provisorio, con el cual se puede vivir y trabajar lealmente por un tiempo en EEUU, en un plazo de 6 a 18 meses, con opciones de prórroga- Fue otorgado por la Secretaria de Seguridad Nacional a personas provenientes de países que por razones peligrosas no puede regresar a su país de origen. El TPS se otorga por condiciones: guerra civil o conflicto armado en curso, desastres naturales, etc. A El Salvador le fue designado el TPS en 2001 debido a los Terremotos de ese año.

Según Kirstjen Nielsen, Secretaria de Seguridad Interna, El Salvador tienen las condiciones para que los salvadoreños amparados por TPS puedan retornar a su país: "Basada en una cuidadosa consideración de la información disponible…la Secretaria de Seguridad Interna determino que las condiciones originales causadas por el terremoto de 2001 ya no existen". De esta manera, septiembre de 2009 será el límite para que los salvadoreños regresen al país. Pero, en realidad, la finalización del TPS obedece a la política anti inmigrante de la administración Trump.



El TPS se había estado otorgando con anterioridad a los salvadoreños, a cambio del apoyo de efectivos militares a las operaciones de control que los yanquis han desarrollado en países del Medio Oriente. También había premios de consolación por el sometimiento del gobierno salvadoreño a las mal llamadas cooperaciones, a través del programa CARSI y Alianza para la Prosperidad, que incluye los Fomilenios I y II, forman parte de los esfuerzos por controlar el flujo migratorio. Estas políticas son la continuidad de la contrainsurgencia establecida desde el siglo XX, cuya peligrosidad social esta vez la presentan otros factores como el narcotráfico y las pandillas.

La nueva etapa y la situación salvadoreña

Si bien la política migratoria es un asunto interno de los EEUU, tiene efectos internacionales. El presidente Trump ha emprendido políticas de recuperación económica de Estados Unidos, atacando a la migración como si fuese un feudo aislado. Dentro de las líneas de acción está la migración "controlada". En un país donde la migración ha sido parte vital de la economía, el ataque a los trabajadores inmigrantes puede tener el efecto contrario. Trump ha echado andar un ambicioso plan que consiste en expulsar inmigrantes no deseados, y en su lugar atraer con la Green Card a inversionistas y profesionales extranjeros, para los que estando viviendo allá y que reúnan las condiciones puedan quedarse, es decir que puedan cargar con los gastos procesales de la Residencia, algo disponible solo a unos cuantos.

El Salvador históricamente ha sido una fábrica de migrantes, empujados por la necesidad de autoexiliarse por determinadas situaciones, cuyo destino principal del éxodo ha sido EEUU. No estamos preparados para los reveses actuales. Los trabajadores que serán deportados, van a encontrarse con la desocupación en un país en crisis económica. La respuesta a tomar no debe ser pasiva, debemos luchar por una mejora del status migratorio que debe ser coordinada con todos los inmigrantes centroamericanos, que tenga apoyo en Centroamérica con movilizaciones de protestas ante las respectivas embajadas yanquis.

POR UNA POLÍTICA DE CARA A LAS ELECCIONES

Por German Aquino

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador oficializó la ya adelantada campaña electoral de las elecciones legislativas y municipales, a realizarse el 4 de marzo del 2018, en las cuales participarán los diferentes partidos políticos legales. Lo anterior permite que los diferentes candidatos realicen sus propuestas a los ciudadanos y realicen sus tradicionales mítines.

Políticos hacen de la violencia y delincuencia su principal tema

Los diferentes partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa y en los concejos municipales han iniciado su proselitismo político haciendo promesas que no cumplirán, haciendo de la violencia y delincuencia un tema de campaña, prometen terminar con la violencia y delincuencia buscando terminar así con el efecto mas no con la causa, como es el caso del Guillermo Gallegos actual presidente de la Asamblea Legislativa y candidato a Diputado por San Salvador de GANA quien nuevamente ha propuesto la pena de muerte manifestando al respecto: "En este lugar, Las Margaritas, que ha sido muy asediado por los pandilleros y donde existe una gran estructura de las pandillas, para mí es muy importante pedir desde aquí la aplicación de la pena de muerte para los pandilleros terroristas… Las Margaritas tiene el deseo de organizarse para defenderse del accionar de las pandillas,…He venido aquí para demostrar que tengo el valor y todo el deseo de impulsar esta medida, porque ya basta de tanto pandillero golpeando nuestras comunidades" (EDH.22/01/2018). La población quiere solución al problema de la violencia, pero este tipo de propuesta no aporta nada. No es nada extraño este tipo de propuestas viniendo de un ex militante de ARENA quienes tuvieron ligados a los escuadrones de la muerte y a los cuerpos represivos de seguridad que mataron y reprimieron al pueblo salvadoreño.

Prohibido olvidar los ataques a la clase trabajadora

Como si nada en miras de captar el voto los candidatos de los diferentes partidos políticos le ofrecen maravillas a las población, se les olvidan que los diferentes ataques realizados por los diputados de todos los partidos políticos desde la Asamblea legislativa a la clase trabajadora mediante leyes y reformas que han sido contrarias a los intereses de la clase trabajadora y pueblo en general como es el caso de la reciente reforma



al sistema de pensiones en la cual todos los partidos políticos tuvieron de acuerdo a pesar que dicha reforma era contraria a los intereses de la clase trabajadora y los únicos que se beneficiaban eran las AFP y el gobierno. Recordemos también la eliminación de incentivos como el escalafón a los empleados públicos. Así mismo es de recordar la eliminación al subsidio, gas, energía eléctrica, etc. lo cual ha venido a impactar negativamente a la ya deteriorada economía de la clase trabajadora y de la clase media.

Desde el gobierno central del FMLN se enaltecen muchos logros, los cuales en cierta medida palean la crítica realidad de los sectores que viven en extrema pobreza pero no han solucionado el problema. En aras de las elecciones se proyectan nuevas acciones pero igual estas acciones son parte de la campaña electoral.

Prevalencia del antidemocrático sistema electoral

La democratización del sistema político electoral continúa pendiente, el FMLN posterior al acuerdo de paz fue incapaz de realizar una verdadera democratización; por su parte la derecha arenera posterior a la pérdida del ejecutivo como una táctica en contra del FMLN realizo cambios en el sistema electoral utilizando para ello la Sala de lo Constitucional entre los cambios están: "...habilita las listas cerradas y desbloqueadas y abre la puerta a las candidaturas no partidarias en las elecciones para diputados…se prohibió por fallo de la Sala que los funcionarios hagan proselitismo mientras estén en el ejercicio de sus cargos y en horas laborales… votar por el rostro de uno o más candidatos a diputados, inclusive, de diferentes partidos políticos… Concejos Municipales están integrados por regidores de diferentes partidos políticos, según los votos que obtengan en la elección de que se trate…A partir de las próximas elecciones de alcaldes y diputados, los miembros que integran las Juntas Receptoras de Votos (JRV) o mesas de votación estarán integradas por ciudadanos sin vínculos partidarios,… creación de la Ley de Partidos Políticos que, entre otros aspectos, regula la elección de las autoridades partidarias y de los candidatos a cargos de elección popular a través del voto de sus militantes. Esa misma normativa obliga a los partidos políticos a transparentar sus fuentes de financiamiento y a revelar a sus donantes privados…"(EDH.13/01/2018).

A pesar de dichas reformas el sistema electoral es antidemocrático, no facilita la libre participación política de todos los sectores, no contempla otros mecanismos de participación en los asuntos políticos como el referéndum, revocatoria de mandato. Etc. Si bien desde 1992 no se han dado los tradicionales fraudes electorales y mínimamente se ha abierto los espacios democráticos, todavía debemos lucha por la democratización del sistema político y jurídico. El pueblo es quien debe elegir a los Magistrados.